



¿HACIA UN NUEVO “*IUS COMMUNE*” MUNDIAL?*

Jorge Rodríguez-Zapata

1. Existe en Estados Unidos una reconstrucción fidedigna de la antigua *Jamestown*, que fue el primer asentamiento colonial estable de Inglaterra en Norteamérica.

El matrimonio de la india *Pocahontas* con el colono *John Rolfe*, evocado recientemente en el cine, permitió que esa pequeña colonia, situada en la desembocadura del río *James*, prosperase en el cultivo del tabaco, estableciese las bases de la propiedad privada y de la vida colonial y subsistiese hasta que, en 1698, se decidió abandonarla y trasladar a *Williamsburg* el gobierno del Estado de Virginia.

En la reconstrucción actual de la antigua *Jamestown* destaca la pequeña Iglesia, donde los colonos se reunían en *town meeting* para regirse en régimen de democracia directa, tras la celebración del oficio religioso.

En el interior de esa Iglesia llama la atención una pequeña lápida de mármol, que recuerda que en aquel lugar se estableció el 13 de Mayo de 1607 el *common law* de Inglaterra traído al Continente americano por los primeros colonos y afirma que,

* Texto adaptado de la Conferencia pronunciada por el autor en Aranjuez el 12 de julio de 2004, en el Curso “Globalización y Justicia”, dirigido por el profesor Dr. Don Andrés Ollero Tassara, en la Universidad de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos I. Se omiten las palabras de circunstancia.

desde la Carta Magna de 1215, el *common law* inglés ha sido el fundamento esencial de la libertad de la persona en el Estado de Derecho, que constituye la mayor riqueza y el mejor logro de la experiencia histórica de los Estados Unidos de América.

La obra clásica de mi amigo el profesor de la Universidad de Virginia (Charlottesville) A. E. Dick Howard, *The road from Runnymede* (editada por su Universidad en el año 1968), tiene el mérito de destacar el relieve esencial de esa importación del *common law* británico, aceptada en forma unánime en la doctrina y en la práctica judicial norteamericana como una *convención* de la *Constitución* del Derecho de los Estados Unidos, como la causa última de la afirmación de la dignidad del ser humano y del fortalecimiento del modelo democrático norteamericano.

2. En los años posteriores al hundimiento del sistema de Estados llamados de socialismo real, en 1989, esos Países han vivido una situación comparable a la que afrontaron los primeros colonos ingleses que se establecieron en un Continente hostil, en el que construyeron de la nada una convivencia política.

A semejanza del “*common law*” inglés, llevado a América en sus barcos por el Capitán John Smith y los primeros colonos que fundaron *Jamestown*, los Estados del Este europeo han sabido importar y disfrutar de una herramienta insustituible para la transición desde el totalitarismo a la democracia. Me refiero a la experiencia comparada de los Estados democráticos que, como un auténtico y nuevo “*ius comune*” (o *common law*), ha servido a las nuevas democracias para aclimatarse a una situación nueva y totalmente desconocida.

Recordemos brevemente la situación de los Estados del Este de Europa antes del colapso del comunismo. La Revolución bolchevique de 1917 instauró en las relaciones internacionales de las dos posguerras mundiales un auténtico clima de “*psicopolicia*”, según el término acuñado y descrito magistralmente por George Orwell en su novela “*1984*”, que había sido desconocido hasta entonces en la Historia de la Humanidad. Los párrafos 1 y 7 del

artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas muestran que después de la Segunda Guerra Mundial se mantuvo el sistema de *Estados soberanos, iguales e independientes* que ha regido la Comunidad internacional desde el Tratado de *Westfalia* de 1648. No obstante desde 1945 esa Comunidad se dividió en dos compartimentos estancos separados por un auténtico *telón de acero*. La división de la Comunidad internacional en la época de la Guerra fría era intelectual además de física. Recuerdo de mi época de estudiante en 1970 que los escasos y destacados internacionalistas rusos autorizados a frecuentar la Academia de Derecho Internacional de La Haya eran todavía muy reticentes a dejarse contaminar por la discusión o la consulta sobre cualquier obra científica distinta a las de *Tunkin* u otros autores autorizados por el llamado Derecho internacional socialista oficial manteniéndose ese clima, según he podido saber, hasta mediados de la década de los ochenta, momento en el que ya se intuía por muchos el fracaso de todo el sistema.

En tal ambiente resulta fácil comprender que cuando se produjo el colapso de la Unión soviética en 1989 los juristas y los jueces de los países del Este de Europa careciesen de conocimientos y de experiencia en las técnicas de un Estado de Derecho, que había sido eliminado y anatematizado como burgués en sus Países, desde la implantación del modelo comunista soviético.

El tránsito de un sistema de partido único a una democracia pluralista obligaba a pensar, en estos Estados, de un modo desconocido y distinto para poder asegurar el respeto a la propiedad privada, la economía de mercado, el principio de división de poderes, la independencia judicial y un larguísimo etcétera de instituciones inasequibles hasta entonces a la mayoría del estamento de los juristas de los Países socialistas, con la única excepción de quienes habían tenido el privilegio de completar su formación estudiando o enseñando allende el telón de acero. Todas estas instituciones se han importado en la última década aprovechando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y

la experiencia y el apoyo de otros Estados democráticos, tras traducir y adaptar con gran esfuerzo leyes extranjeras.

En el Este de Europa se ha producido, en definitiva, una auténtica recepción, similar a la del Derecho romano en la Edad Media o a la del *common law* en las costas de Virginia a principios del siglo XVII.

3. El fenómeno no se ha reducido sólo a la experiencia de los Estados del Este de Europa, ni es nuevo o desconocido para nosotros.

Tras la Constitución española de 1978 Guy Hermet distinguió dos secuencias distintas de transición de la dictadura a la democracia, al contraponer la llamada *secuencia ibérica posterior a 1974*, que condujo a las Constituciones democráticas de Portugal y España y la secuencia posterior a la Segunda Guerra Mundial, que lleva a la democracia a la República federal de Alemania, Italia, Japón y la misma Francia (G. Hermet, “*Emerging from dictatorship: The role of the Constitution in Spain (1978) and Portugal (1976)*” en la obra ed. por Vernon Bogdanor, *Constitutions in Democratic Politics*, Cambridge, 1988, p. 258 ss.). La experiencia posterior ha dado actualidad a esa distinción, repetida por otros autores, al producirse nuevas oleadas sucesivas de transición a la democracia. Sin duda hay que añadir hoy una tercera *secuencia oriental, posterior a la caída del muro de Berlín en 1989* que ha seguido a la desaparición del telón de acero y la vuelta a la democracia de la Federación de Rusia y de los Estados sometidos a la égida del Imperio soviético. Pero, si volvemos la mirada a los Países iberoamericanos, a Sudáfrica o al mismo movimiento por la igualdad de derechos civiles, que se produce en Estados Unidos a partir de 1960, podríamos hablar de una última *secuencia global* para referirnos a los intentos de afirmar la garantía de la dignidad humana y de la protección de los derechos humanos a escala planetaria.

La primera oleada —la de Francia, Italia y Alemania— llevó a hablar, en la segunda posguerra, de un renacimiento del Derecho

natural, como reacción frente al positivismo, al que se responsabilizó de permitir al nazismo negar, pura y simplemente, la dignidad individual del ser humano. Así el artículo 1.1. de la Ley Fundamental alemana establece hoy una cláusula sobre la dignidad humana, que constituye, como afirma *Peter Häberle*, el fundamento esencial del Estado constitucional de Derecho. El fracaso histórico del antiindividualismo marxista-leninista en 1989 ha abierto el camino al reconocimiento global de la dignidad del ser humano, como principio consagrado en los textos constitucionales positivos.

Así, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución de Portugal (1976/1992) lo define como una República soberana basada en los principios de la dignidad humana y de la voluntad del pueblo; El artículo 2 Constitución de Grecia 1975/1986 proclama que el respeto y la protección de la dignidad de la persona representan una obligación fundamental del Estado y el Artículo 10.1 de la Constitución española reconoce que la afirmación de la dignidad de la persona y de los derechos inviolables que le son inherentes constituyen fundamento del orden político y de la paz social (*apud P. Häberle*, últimamente, en *La dignità humana come fondamento della Comunità statale, Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Milán, Giuffrè, 2003, pp. 2 ss).

En la actualidad no se recurre a principios de justicia naturales, trascendentales al ordenamiento jurídico positivo, para lograr dar sentido y justificación a éste. La experiencia actual permite encontrar en lo más hondo de la propia experiencia jurídica los criterios o principios que fundamentan y dan valor al ordenamiento mismo.

Ese es el valor de las cláusulas sobre la dignidad humana y su reconocimiento en el vértice o Preámbulo de las Constituciones, que conecta con una tradición milenaria que encuentra su origen en el mensaje de Jesús y el cristianismo. De ahí el éxito que tiene en la actualidad el recurso al Derecho comparado, a los modelos

extranjeros o la asunción de las razones expresadas por los jueces de otros Países ya que permiten resolver, sin necesidad de trascender la experiencia jurídica, conflictos semejantes que se plantearon antes en el extranjero y se nos plantean ahora en nuestra experiencia como una especie de *razón natural*, decantada en la experiencia, que puede y debe ser empleada en un ordenamiento. en su transición a la democracia.

El Tribunal Constitucional de la República de Sudáfrica establecido en 1994, en su primera Constitución democrática, está expresamente obligado, así, a tomar en consideración en sus sentencias el Derecho internacional en materia de derechos humanos y el Derecho comparado de Países democráticos, lo que ha hecho ya en varias ocasiones, aunque adoptando sólo ejemplos de sistemas jurídicos muy cercanos al suyo.

4. Las circunstancias indicadas pueden parecer lógicas pero su implantación en la sociedad contemporánea ha supuesto un cambio realmente asombroso desde la perspectiva de las concepciones jurídicas fundamentales en las que nos hemos formado los juristas de mi generación. En efecto en la Europa de 1970 que un Tribunal se saltase su sistema de fuentes del Derecho para aplicar por analogía una norma o una sentencia extranjera constituía una auténtica aberración, que generaba una profunda inseguridad jurídica y podía dar lugar a la responsabilidad personal del juez. Al terminar la Segunda Guerra Mundial regía el principio de primacía absoluta de la ley, como expresión normativa de la voluntad del Estado así como el de la subordinación total del juez a la ley, como legado de la Revolución francesa.

En la década de 1970 escribí mi tesis doctoral en Italia sobre el problema de la aplicabilidad del Derecho internacional en los ordenamientos internos (publicada en los *Studia Albortiana* bajo el título "*Constitución, tratados internacionales y sistema de fuentes del Derecho*", Bolonia, 1976) y el panorama mundial era radicalmente distinto del que existe ahora. El fenómeno de recepción de categorías de ordenamientos extranjeros o la aplicación

de la jurisprudencia de Tribunales Internacionales, como el Europeo de Derechos Humanos planteaba problemas dogmáticos de muy difícil solución en aquél momento.

Antes de que se produjese lo que hemos denominado *secuencia ibérica* de transición a la democracia, en la década de 1970, los ordenamientos jurídicos de los Estados de la época oponían tres obstáculos dogmáticos de envergadura a este fenómeno de recepción:

a) La consideración del Derecho internacional como Derecho genuinamente interestatal. Sólo los Estados soberanos y las Organizaciones internacionales poseían una subjetividad internacional indiscutida.

Es cierto que un sector de la doctrina hablaba ya de una subjetividad internacional del individuo en materia de derechos humanos pero se trataba más de píos deseos, afirmados sólo —como demostró la Conferencia de Helsinki— por el sector de la Comunidad Internacional integrado por los Estados llamados capitalistas, que de afirmaciones con apoyo real en la práctica internacional. La posibilidad de recurso individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no era una excepción a la regla: La Comisión Europea de Derechos Humanos constituía un filtro a las demandas individuales que aseguraba la falta de inmediatez internacional ("*Völkerrechtunmittelbarkeit*") del individuo también en esa esfera.

b) La falta de interés por los estudios de Derecho comparado en las Universidades, considerándose esta rama como algo exquisito para el cultivo de especialistas muy selectos y de utilidad escasa, a lo que se acompañaba la obvia consideración de que el Derecho extranjero debía ser siempre considerado como un simple hecho para el Derecho nacional.

c) La organización soberana de los Estados basada en una norma fundamental impermeable y rígida que establecía, en forma exclusiva y excluyente, la determinación de cuáles fuesen las *fuentes del Derecho y su ordenación a efectos de su aplicabilidad*

interna a lo que se anudaba la prohibición constitucional estricta a todos los jueces de aplicar normas al margen de lo establecido en la Constitución.

Las Constituciones atribuían la exclusividad o preponderancia en la creación de Derecho a un órgano de carácter legislativo y determinaban una enumeración jerarquizada y exhaustiva de las restantes normas jurídicas o de los fenómenos de producción del Derecho aceptados en el ordenamiento concreto en cuestión. La aplicación del Derecho internacional, ya fuese general o convencional, en el Derecho interno de un Estado era también cuestión que debía ser resuelta por cada Constitución (mediante los mecanismos de transformación, adaptación o adopción del Derecho internacional por el Derecho interno). Los jueces internos y los demás operadores jurídicos estaban vinculados en forma muy estricta al sistema de fuentes establecido en el estereotipo constitucional y, salvo responsabilidad, tenían rigurosamente prohibido la aplicación de normas extrañas al sistema. El Derecho extranjero debía, en fin, considerarse siempre como un simple hecho a efectos de su aplicación en el ordenamiento interno.

5. Nuestra propia experiencia desde 1978 nos ilustra sobre la transición desde un régimen autoritario a los principios de un ordenamiento democrático. El desarrollo legislativo de la Constitución, con la introducción por vía legislativa de los cambios institucionales básicos, fue el primer paso. El siguiente consistió en una poco advertida modificación de la posición constitucional de los jueces, que han recibido una mayor libertad a la hora de hallar, aplicar e interpretar el Derecho, sobre todo con el acicate de la Justicia constitucional.

En España, la tradición universalista, afirmada desde la lúcida afirmación de un "*ius totius orbis*" por nuestro Francisco de Vitoria, posibilitó un precepto constitucional clave, que es el artículo 10.2 de la Norma Fundamental. Al determinar que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas ratificados por España, este precepto —que tiene su antecedente en el artículo 7 de la Constitución de 1931— ha permitido a la jurisprudencia llenar de contenido la parte dogmática de nuestra Constitución. La creación de un Tribunal Constitucional, y el establecimiento del recurso de amparo como una de sus competencias esenciales, ha completado la tarea. Una vez más, y hay que recordarlo con legítimo orgullo, España se ha adelantado en universalismo a lo que hoy es una experiencia mundial.

Los ejemplos de la jurisprudencia constitucional extranjera tuvieron una clara influencia en nuestro Tribunal Constitucional, gracias a cuya jurisprudencia inicial se modernizaron las estructuras jurídicas en un periodo muy breve de tiempo. Aproximadamente una treintena de Estados del Este de Europa, que han llegado a la democracia en la denominada *secuencia oriental*, también han introducido en sus ordenamientos Tribunales Constitucionales que están realizando la misma labor. Doctrinas que tardaron casi cuarenta años en madurar en Alemania, Austria o Italia se han implantado en España o Portugal en menos de diez años y lo están haciendo en los Países que llegan a la democracia en periodo aún más breves de tiempo.

Sin embargo sólo cuatro de los nuevos Tribunales Constitucionales europeos aparecen dotados del recurso de amparo para la protección de derechos fundamentales. Aunque introducido en la Europa central como una figura de origen alemán (*Verfassungsbeschwerde*) no cabe olvidar que el amparo es una institución genuinamente española, de abolengo aragonés, que llegó a nuestra Constitución de 1931 por influencia del juriconsulto mejicano Rodolfo Reyes y que tuvo efectividad práctica en el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, mucho antes de que se introdujese en Alemania o en el ámbito de la Europa central. Las voces que, en nuestro País, defienden hoy la eliminación del amparo como competencia del Tribunal Cons-

titucional deberían tener presente, además de la inconstitucionalidad de su propuesta, esta importante circunstancia histórica.

El recurso de amparo es la competencia que más prestigio y mejor conecta a un Tribunal Constitucional con los ciudadanos. Como es obvio esta aseveración no está reñida con la necesidad de su limitación y su eficacia, lo que obligará a reformar tarde o temprano la ley orgánica de nuestro Tribunal Constitucional para reducir un número desbordado de recursos de amparo. Es claro, sin embargo, que el bisturí de la reforma –para la que la experiencia alemana de la Comisión Benda sería sobradamente ilustrativa– no equivale a una cirugía de amputación.

6. Aparte de los mecanismos públicos y privados de cooperación internacional entre Países, entre los que destacan las Conferencias internacionales de Tribunales Constitucionales, existen múltiples programas de cooperación judicial internacional, constitucional y ordinaria. Los jueces viajan hoy con frecuencia y entran en contacto con sus colegas de otros Países y con el Derecho extranjero, lo que provoca que las resoluciones extranjeras adquieran relieve en su ordenamiento.

La jurisprudencia de los Tribunales más prestigiosos está disponible *on line* a través de Internet, con mecanismos avanzados de búsqueda que permiten a un solo juez conocer a través de su ordenador personal las últimas decisiones norteamericanas, alemanas o iberoamericanas en una determinada materia. Poco importa que a la libertad de información se la denomine “*habeas data*” en la jurisprudencia de algunos Tribunales iberoamericanos o que la inadmisión “*a limine*” se conozca como rechazo en puerta. Lo esencial es que las experiencias son equiparables y que el razonamiento humano que se aplica a ellas puede resultar válido como *razón común* o *razón natural* para nuestra propia experiencia.

Han proliferado, por otra parte, Tribunales y cuasi tribunales internacionales para la protección de los derechos humanos, con una jurisprudencia cada vez más amplia y rica, lo que determina

que en materias, como la pena de muerte, el fenómeno de la inmigración, las detenciones policiales, la homosexualidad, la igualdad femenina o problemas de la vida local las decisiones extranjeras tengan un relieve creciente en las decisiones de nuestros Tribunales.

Los Tribunales de todos los Países no sólo aplican Derecho internacional en su misión típica de interpretar y aplicar tratados internacionales sino en una forma aún más amplia que la que reconoce, por ejemplo, el artículo 10.2 de nuestra Constitución. Muchas veces los Tribunales extranjeros aplican por analogía preceptos de la jurisprudencia internacional que no son vinculantes para sus propios Estados. El fenómeno no es ya exclusivo de Estados llegados recientemente a la democracia. Estados viejos, de amplia tradición democrática, también se dejan influenciar por la jurisprudencia extranjera de Estados nuevos, por lo que el fenómeno puede ser considerado como el nacimiento de un nuevo “*ius commune*” a escala global. Algunos ejemplos recientes servirán para demostrarlo.

7. La reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional español de 19 de febrero de 2003 (STC 2/2003) aborda el problema de la interdicción de someter a un reo a doble enjuiciamiento penal (*double jeopardy*) y no duda, en el sentido que se acaba de exponer, en invocar la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos en apoyo de su razonamiento y, lo que es aún más interesante, el Protocolo adicional 7º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pese a que el mismo no es aplicable en España, que no lo ha ratificado, como la propia sentencia reconoce (FFJJ 3 y 4).

No es un caso único. Son cada vez más frecuentes los supuestos de Tribunales que invocan, por analogía, normas o jurisprudencia que no es aplicable, justificándose por la importancia del precedente que se establece en ellas. Esta receptividad de los Tribunales hacia ejemplos de Derecho comparado provoca la atención inmediata de la doctrina y de los Abogados y la cre-

ciente invocación en los escritos forenses de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional de Justicia o el Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos.

Un ejemplo paradigmático es el de la sentencia del *Privy Council* británico en el caso *Pratt and Morgan v. The Attorney General of Jamaica* de 2 de noviembre de 1993. Se trataba de una apelación ante el *Privy Council*, que actuaba en sede de Tribunal Supremo de Jamaica, frente a una sentencia del Tribunal de apelaciones de Jamaica en la que se discutía la constitucionalidad, conforme al artículo 17.1 de la Constitución de Jamaica de dos penas de muerte.

Los recurrentes habían sido sentenciados a la pena de muerte en el año 1979 y estuvieron a la espera de la ejecución de la pena durante 14 años, hasta que la causa se falló definitivamente el 2 de noviembre de 1993. Durante todo este período fueron advertidos hasta tres veces de la inminencia de su ejecución, leyéndoseles la orden de ser ejecutados siendo situados en una celda inmediata al patíbulo, en un proceso plagado de irregularidades. Ante estos antecedentes el *Privy Council* británico anula las penas de muerte y las conmuta por penas de cadena perpetua declarando que en todos los casos en los que la ejecución de una pena de muerte se retrase en más de cinco años debe considerarse que se ha incurrido en la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, que considera establecida en el artículo 17.1 de la Constitución de Jamaica.

Esta declaración era de carácter general, por lo que desplegó efectos ulteriores para centenares de condenados a muerte en las mismas circunstancias. Como señala *Thomas Buergenthal* (*International Judicial Observer*, n° 2, enero de 1996, "*Secundum legem*"), la trascendencia de la sentencia deriva también de que el *Privy Council* toma en consideración las decisiones de varios Tribunales internacionales para justificar su interpretación de la Constitución de Jamaica. Pratt y Morgan habían recurrido previa-

mente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Naciones Unidas para la protección de los Derechos Humanos ya que Jamaica había ratificado tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo optativo. El *Privy Council* no deja de señalar *el peso y el respeto* que merece la interpretación de estos órganos cuasijudiciales y la necesidad de interpretar la Constitución de Jamaica en un contexto de respeto a las obligaciones internacionales. Estas circunstancias no nos sorprenden mucho en España, a la vista de nuestro artículo 10.2 CE. Pero lo que sí choca, y es lo más importante del caso, es que también se invoca por el *Privy Council* la autoridad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso *Soering contra el Reino Unido*, en el que se denegó la extradición a Estados Unidos de una persona condenada a muerte en el Estado de Virginia, considerando que el fenómeno del pasillo de la muerte a la espera de la ejecución de la pena ("*death row*") constituye un trato inhumano y degradante a efectos del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y esa Convención no resultaba aplicable a Jamaica.

Como puede apreciarse, el ejemplo de nuestra STC 2/2003 no es único en el mundo. El propio Tribunal Supremo de Estados Unidos ha empezado a considerar en sus sentencias casos de jurisprudencia extranjera. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el caso *Atkins v. Virginia*, de 20 de junio de 2002, sobre la aplicabilidad de la pena de muerte a personas que sufren retraso mental o en el caso *Lawrence et al. V. Texas*, de 26 de junio de 2003, en el que el Tribunal Supremo declara inconstitucional una Ley del Estado de Tejas que castigaba penalmente relaciones homosexuales consentidas entre adultos en la intimidad. El juez Kennedy, ponente en este último caso, invoca en su favor una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso *Dudgeon contra el Reino Unido*) para demostrar cómo, en un contexto cultural más amplio

que el de Estados Unidos, se rechaza la posibilidad de criminalizar este tipo de conductas homosexuales.

En un voto particular a este sentencia el juez Antonin Scalia critica duramente la cita de la jurisprudencia extranjera, que considera una afirmación sin sentido, ya que la consideración de puntos de vista extranjeros por parte de la mayoría es, dice, claramente incompleta. Afirma además que la afirmación es un *dictum* peligroso, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos no está para imponer a los americanos caprichos, costumbres o modas extranjeras.

8. Es de recordar el célebre discurso de Winston Churchill de 19 de septiembre de 1946, cuando defendió en Zurich que era necesaria una solución a la situación internacional de entonces por la que, como por milagro, se transformase todo el escenario mundial y en pocos años Europa fuese tan libre y tan feliz como lo era Suiza en aquél momento. Tras lo que concluyó: "*We must build a kind of United States of Europe*". Medio siglo después de la creación del Consejo de Europa, y de su Tribunal Europeo de Derechos Humanos, parece haberse producido el milagro que lleve a la consolidación de una Unión Europea compuesta hoy de 25 miembros y presidida por una auténtica Carta de Derechos Fundamentales.

El fenómeno de la *inmigración masiva* en todos los Países europeos plantea el problema del respeto mutuo de nuestras culturas, compatible con su enriquecimiento recíproco, pero también la posibilidad de *nuevas secuencias de transición*, cuyas características nos resultan todavía inciertas y desconocidas.

La posibilidad global de un *status mundialis hominis*, que defiende Peter Häberle, encuentra su dogma antropológico y jurídico en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas:

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos".

La libertad religiosa plantea hoy nuevos retos si se enfrenta con el principio de la dignidad humana y el respeto necesario, que se debe imponer en cada circunstancia como un auténtico principio *cogente* de orden público de ese nuevo “*ius commune*” al afirmar, por ejemplo, como esencial, la igual dignidad, en la Ley y ante la Ley, del hombre y de la mujer.

Y es que, en la milenaria cultura de la dignidad humana, es importante tomar en consideración el pensamiento clásico de *Wilhelm von Humboldt*, al que el mismo *Häberle* (op. cit., p 3 s.; 4 *in nota*) pide, con acierto, que se le atribuya el valor de ser considerado como un texto constitucional en sentido amplio:

“El Estado debe abolir la forma de pensar inhumana y cargada de perjuicios que no juzga a una persona por sus características peculiares, sino tomando en consideración sus antepasados y su religión y lo considera, contra el verdadero concepto de la dignidad humana, no como un individuo sino como perteneciente a una raza con la que, casi por necesidad, debe compartir ciertas características”.